



Comunidad de Madrid
Consejería de Gobernación

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL

Plaza de Chamberí, 8 • Teléfono 445 07 50 • Madrid

NOMBRAMIENTO Y CESE DE LOS ALCALDES

10

12/88.550



1. Nombramiento del Alcalde

Constituida la Corporación y en la misma Sesión, se procederá a la elección de Alcalde.

Podrán ser candidatos todos los Concejales que encabezan sus correspondientes listas. Se puede, por tanto, ser primero de una lista y no presentarse como candidato a la Alcaldía. Pero no se puede ser segundo, tercero, etcétera, de una lista y presentarse como candidato a la Alcaldía (artículo 28.3 de la Ley de Elecciones Locales).

Son electores todos los Concejales que hayan asistido a la Sesión Constitutiva del Ayuntamiento.

Resultará elegido Alcalde el candidato que obtuviese el voto de más de la mitad del número legal de miembros de la Corporación. Según la escala del artículo 5 de la Ley de Elecciones Locales, el número de votos necesarios para resultar elegido Alcalde es el siguiente:

Número legal de miembros de la Corporación	Número de votos necesarios para ser elegido Alcalde
5	3
7	4
9	5
11	6
13	7
17	9
21	11
25	13

Si ninguno obtuviere dicha mayoría, no se repite la votación, sino que se proclama directamente al candidato cuya lista hubiera obtenido más votos en el correspondiente Municipio. En caso de empate entre listas, se proclama Alcalde al candidato de más edad, dentro de los empatados (artículo 28.3 de la Ley de Elecciones Locales).

Aunque la Ley no diga nada al respecto, se puede pensar que es preciso cumplir, previamente al acto de elección de Alcalde, con la solemnidad del acto de presentación de candidaturas al cargo de Alcalde, porque no son candidatos automáticamente todos los primeros de las listas; son tan sólo los que quieran serlo. La expresión del artículo 28.3 C) de la Ley de Elecciones Locales no dice que tengan que ser candidatos todos los Concejales que encabezan sus correspondientes listas, sino que "podrán" ser candidatos, de lo cual se deduce que es necesario manifestar solemnemente antes de la elección la voluntad de ser candidato.

Por otra parte, ha de entenderse que ha desaparecido la posibilidad de que el proclamado Alcalde no acepte el cargo y no tome posesión del mismo. En el artículo 2.4 del Real Decreto 561/79, de 16 de marzo, se decía que el Alcalde, previa aceptación, tomará posesión de su cargo. Pero el artículo 2.4 del Real Decreto 1169/83, de 4 de mayo, que deroga al anterior, suprime la expresión de la "previa aceptación", se ordena que el que resulte proclamado Alcalde tomará inmediata posesión de su cargo. Si se tiene en cuenta lo dicho anteriormente sobre la necesidad de que los primeros de las listas presenten formalmente su candidatura antes del acto de elección de Alcalde, resulta más coherente la obligación para el Alcalde electo de tomar inmediata posesión de su cargo (puesto que ha sido candidato formalmente) que el sistema anterior de permitir al Alcalde una vez proclamado como tal no aceptar el cargo y no tomar posesión del mismo.

Ahora bien, si el proclamado Alcalde no se hallare presente en la Sesión Constitutiva (y puede ocurrir por haber presentado por escrito su candidatura formal al cargo de Alcalde), será requerido para tomar posesión en el plazo de cuarenta y ocho horas, y si no lo hace sin causa justificada, se procederá a nueva votación en Sesión Extraordinaria convocada al efecto,

en la cual el candidato de la lista del proclamado Alcalde ya no será el primero, sino el siguiente de su misma lista, si es que ha presentado a su vez su candidatura.

En materia de la toma de posesión del Alcalde proclamado conviene hacer una serie de precisiones:

a) La toma de posesión es requisito imprescindible para el ejercicio del cargo público y el juramento o promesa es elemento esencial y constitutivo de la misma.

El ejercicio de un cargo público de carácter administrativo consiste en la producción de actos administrativos con eficacia jurídica, y para ello es requisito imprescindible que la persona física que actúa como titular del órgano en cuestión esté investida legalmente. Así, por ejemplo, Garrido Falla dice en su Tratado de Derecho Administrativo, que "cuando esta titularidad no existe o está viciada, debe llegarse a la conclusión de que el acto no emana de verdaderos órganos administrativos". En esencia, la toma de posesión es un acto formal en virtud del cual se produce la habilitación a una persona física para el ejercicio de un cargo público, bien se trate de autoridades, bien se trate de funcionarios.

El acto formal en que consiste la toma de posesión a que se ha hecho mención en el párrafo anterior, tiene como elemento primordial e inexcusable el compromiso solemne y público de la persona física con el cumplimiento de las obligaciones y derechos que el ejercicio del cargo comporta, y este compromiso se patentiza y expresa por medio del juramento o promesa.

Por ello, el artículo 373 del Código Penal configura como delito el entrar a desempeñar un empleo o cargo público sin haber prestado en debida forma el juramento o promesa.

Por lo que respecta al caso específico del Alcalde, esta obligación inexcusable de prestar juramento o promesa antes de empezar a ejercer el cargo, está rotundamente determinada en el artículo 65 de la Ley de Régimen Local, precepto no derogado y, por tanto, en plena vigencia, donde se dice que: "Al comenzar el ejercicio de sus funciones, el Alcalde jurará el cargo ante el Ayuntamiento Pleno." Si se pone en relación este artículo 65 de la Ley de Régimen Local con el artículo 373 del Código Penal, es evidente que el momento para la prestación de juramento o promesa del cargo de Alcalde es en la misma sesión constitutiva y no en momentos posteriores, salvo que el Alcalde se abstuviese durante ese lapso de tiempo de ejercer su cargo.

b) El plazo hábil para la toma de posesión del cargo de Alcalde está determinado por Ley.

De lo dicho anteriormente se deduce claramente que la toma de posición consiste en el comienzo solemne del ejercicio de las competencias del cargo de Alcalde, y que este ejercicio no es posible, sin incurrir en delito, si previamente no se ha prestado el juramento o promesa. Pero es que, además, el Real Decreto 1169/1983, de 4 de mayo, por el que se dictan normas para la constitución de las Corporaciones Locales, dictado en desarrollo de la Ley de Elecciones Locales, en su artículo 2.4 regula minuciosamente el momento en que debe tomarse posesión del cargo de Alcalde, y lo regula de tal manera que obliga al proclamado Alcalde a tomar inmediata posesión de su cargo en la propia sesión constitutiva. Por tanto, el juramento o promesa del Alcalde tiene que prestarse inexcusablemente en la sesión constitutiva. El propio artículo 2.4 citado establece un procedimiento alternativo para el caso de que se incumpliese esta obligación, y dicho procedimiento alternativo es el de celebración de un nuevo acto de elección, según el artículo 28.6 de la Ley de Elecciones Locales. Es decir, que el Real Decreto 1169/1983, de 4 de mayo, da un plazo hábil para la toma de posesión de la Alcaldía y fuera de dicho plazo ordena que se realice un nuevo acto de elección.

Es decir, que la propia Ley determina las consecuencias jurídicas si no se cumple con el plazo hábil determinado por la Ley, por lo que debe concluirse que no existe la posibilidad de subsanación.

c) El juramento como Concejal no supe el juramento del cargo de Alcalde.

No existe el juramento o promesa genérico de cargos públicos, sino que cada cargo específico debe ser jurado o prometido de modo expreso. En este sentido, debe distinguirse el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, del juramento o promesa de fiel cumplimiento del cargo público. Es evidente que con una sola vez que se jure acatamiento a la Constitución queda garantizado el compromiso de que la persona física que va a desempeñar un cargo público lo desempeñará con fidelidad a la Constitución. Lo cual no debe confundirse con el juramento o promesa de fiel cumplimiento de un cargo público. Puesto que, cada cargo público, tiene una configuración específica con el ejercicio de unas competencias propias, que son precisamente las que deben jurarse o prometerse de modo expreso. Sabido es que las obligaciones y derechos del ejercicio del cargo de Concejal poco se parecen a las obligaciones y derechos del ejercicio del cargo de Alcalde, de tal manera que si solamente se jura o promete el cargo de Concejal, quedan sin jurarse o prometerse la totalidad de las competencias del cargo de Alcalde, y lo que quiere la Ley es que cada cargo quede garantizado por la persona física que lo va a ostentar, de forma expresa y específica.

Pudiera ponerse en duda la obligatoriedad del juramento o promesa del cargo de Concejal, por cuanto un Concejal, si no ha recibido ninguna delegación de la Alcaldía ni ha sido designado Teniente de Alcalde, no tiene más obligaciones que las de colaborar y votar en conciencia en las sesiones corporativas. Por ello, la Ley de Régimen Local no contiene ningún precepto que atribuya competencias al cargo de Concejal. En todo caso, a lo que está obligado el Concejal es a prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, pero obsérvese que en este caso el objeto directo del juramento o promesa no es el cumplimiento del cargo, sino el acatamiento a la Constitución. En cambio, en el caso del ejercicio del cargo de Alcalde, la situación es completamente distinta, puesto que la Ley de Régimen Local encomienda al Alcalde unas atribuciones concretas y determinadas, que deben ser juradas o prometidas como objeto directo. En este caso, el Alcalde lo que jura no es el acatamiento a la Constitución, sino el cumplimiento del cargo.

La Circular de la Dirección General de Administración Local, de 11 de abril de 1979 (publicada en el "Boletín Oficial del Estado" de 12 de abril de 1979), aludía a esta cuestión en su punto séptimo y reconocía que la Ley de Elecciones Locales nada señala respecto a la prestación de juramento o promesa de los nuevos miembros de las Corporaciones Locales, refiriéndose con ello a los Concejales; pero en el mismo punto séptimo hacía la salvedad del cargo de Alcalde y se cuestionaba sobre la necesidad de que el Alcalde elegido jurase precisamente con la fórmula establecida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. Por eso, la propia Circular decía que la Mesa de constitución del Ayuntamiento podría tomar juramento o promesa al Alcalde elegido con arreglo a la fórmula establecida en el citado Real Decreto 707, con lo cual se quería decir que la Mesa tenía varias alternativas para tomar juramento o promesa al Alcalde (una, exigirle la fórmula del Real Decreto 707; otra, exigirle otra fórmula cualquiera con la cual quedase suficientemente jurado o prometido el ejercicio del cargo), pero no ponía en duda, ni mucho menos, la obligatoriedad para el Alcalde electo de prestar juramento o promesa antes de empezar a ejercer el cargo, pues una Circular de la Dirección General de Administración Local no puede ir en contra de lo establecido en el Código Penal y en la Ley de Régimen Local, textos legales ambos, en los cuales se declara rotundamente la obligación del Alcalde electo de prestar juramento o promesa de su cargo antes de empezar el ejercicio del mismo.

2. Cambio de Alcalde por renuncia o fallecimiento

En el caso de que se produzca la vacante en el cargo de Alcalde se procederá de nuevo a la elección de Alcalde en la misma forma y con los mismos requisitos que en la sesión constitutiva, considerándose que encabeza la lista en que figuraba el Alcalde cesante el siguiente de la misma.

Pero conviene hacer unas precisiones en esta materia:

a) Efectos de la dimisión de un Alcalde.—El Alcalde dimitido no pierde por ello la condición de Concejal, pero pasa al último lugar con respecto al resto de los Concejales de su candidatura, pues el artículo 11.2 de la Ley de Elecciones Locales ("cada elector dará su voto a una sola lista, sin introducir en ella modificación alguna ni alterar en la misma el orden de colocación de candidatos") y el artículo 11.5 de la misma Ley ("determinado el número de vacantes que correspondan a cada lista, serán adjudicadas a los candidatos incluidos en la misma por el orden de colocación en que aparezcan"), impiden la posibilidad de intercalar al Concejal, dimitido como Alcalde, entre dos Concejales ordenados correlativamente, y, por otro lado, ha perdido la cabecera de la lista, según se dice en el artículo 28.6 de la Ley de Elecciones Locales ("en el caso de vacante de la Alcaldía se procederá de nuevo en la forma determinada en el apartado tres de este artículo, considerándose a estos efectos que encabeza la lista en que figuraba el Alcalde el siguiente de la misma").

No hay, pues, más remedio que interpretar que el Alcalde dimitido pasa al número último de los Concejales de su candidatura por ser el único modo de hacer compatible la prohibición de intercalación en las listas con la circunstancia de que el segundo de la lista pase a ser el primero de la misma para adquirir la condición de candidato a la Alcaldía, cuando haya demostrado como tal el primero. Con ello quiere decirse que todos los Concejales de esa lista son Concejales preferenciales al cargo de Alcalde con respecto al Alcalde dimitido.

b) La renuncia al cargo de Alcalde no apareja la baja como Concejal.

Para renunciar al cargo de Alcalde no es preciso renunciar al cargo de Concejal, pues se trata de cargos obtenidos en distintos actos electorales. El cargo de Concejal es fruto del cociente electoral obtenido en elecciones municipales, cuyos votantes han sido los vecinos inscritos en el censo electoral. En cambio, el cargo de Alcalde es fruto de una elección entre Concejales, en el supuesto más general. Si se tiene en cuenta, por otra parte, que las funciones de Alcalde y las de Concejales son distintas, no se ve la razón para que la renuncia de un cargo implique la baja en el otro.

Es más, hay un caso concreto en que un criterio distinto del aquí mantenido conduciría al absurdo. Piénsese en un Alcalde que dimita por haber sido elegido Presidente de Diputación, ya que ambos cargos son incompatibles según el artículo 28.7 de la Ley de Elecciones Locales. Si se tiene en cuenta que sólo los Concejales de la provincia pueden ser Presidente de la Diputación, resultaría que cesa como Alcalde para ejercer como Presidente de la Diputación, pero tiene que cesar como Presidente de Diputación por haber perdido la condición de Concejal simultáneamente en el cargo de Alcalde.

Son estas razones las que impulsan a rechazar la tesis de que para renunciar al cargo de Alcalde es necesario renunciar al cargo de Concejal, tesis, por otra parte, basada en la omisión de la Ley de Elecciones Locales, que reconoce la figura de la renuncia al cargo de Concejal, pero no habla de la posibilidad de la renuncia al cargo de Alcalde, lo cual llevó a una parte de la doctrina a pensar que sólo se podía renunciar al cargo de Alcalde por la vía de renuncia al cargo de Concejal.

c) No es posible la renuncia a candidato a la Alcaldía.

No puede admitirse la renuncia de los primeros de las listas en favor de los segundos ni siguientes cuando se celebra

elección de Alcalde. Porque sólo los Concejales que encabezan las listas tienen la posibilidad de ser candidatos a Alcalde, con la única excepción de la lista a que pertenece el anterior Alcalde, en que figurará como candidato el segundo de la misma. La expresión del artículo 28.3 de la Ley de Elecciones Locales ("Podrán ser candidatos todos los Concejales que encabezen sus correspondientes listas") merece ser entendida en el sentido de que tan sólo podrán ser candidatos los Concejales que encabezen sus correspondientes listas. Por tanto, la posibilidad no es de que sea candidato un Concejal que no es primero de la lista, sino de que haya listas que no presenten candidato a la elección de Alcalde. Dicho de otra manera: no es obligatorio que todas las listas presenten candidatos a la elección de Alcalde, pero si se presentan a la elección, quien debe ostentar la condición de candidato es el primero de la lista y nadie más que el primero de la lista, porque si se dice de éstos que podrán ser candidatos, se está diciendo simultáneamente que los demás de la lista no pueden ser candidatos.

El cargo de Alcalde, como el de Concejal, es renunciable, pero esta renuncia está por fuerza referida a momentos posteriores al de la toma de posesión de la Alcaldía. Antes de ese momento, la condición de candidatos recae obligatoriamente en el primero de la lista, y no en otro Concejal de la misma. Es decir, que la facultad de renunciar a ser candidato a Alcalde no reside en el Concejal primero de la lista, sino en la lista entera. Las opciones, por tanto, para la elección de Alcalde son: la de presentar al primero de la lista como candidato y la de no presentar candidato.

Debe, por tanto, concluirse que no puede admitirse la renuncia de los primeros de las listas en favor de los segundos ni siguientes, porque está clara la voluntad del legislador de que el candidato para la elección de Alcalde es tan sólo el primero de cada lista, y esta voluntad sería contradicha si mediante la fórmula de la renuncia cada candidato cediera el puesto al siguiente, en fraude de la Ley. Asimismo, se daría fraude de Ley si cada candidato primero de su lista, elegido Alcalde, y en la misma sesión, no aceptase la Alcaldía y pudiera celebrarse nueva votación figurando como candidato el siguiente de la lista.

3. Cese del Alcalde por moción de censura

En un principio, a raíz de la Ley de Elecciones Locales, y como consecuencia de que en la misma no se preveía la destitución de Alcaldes en contraposición con la figura de la destitución del Presidente de la Diputación previsto expresamente en el artículo 34.3 de la Ley de Elecciones Locales, se pensó que no existía la posibilidad de que por medio de votación los Concejales destituyesen al Alcalde.

Sin embargo, se han producido dos sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la de 14 de julio de 1983 y la de 27 de marzo de 1984, que han admitido como acuerdos válidos los producidos en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y en el Ayuntamiento de Viladecamps, por los cuales se destituyó a los respectivos Alcaldes, y auto del Tribunal Constitucional confirmando el criterio sentado por el Tribunal Supremo.

En la sentencia de 14 de julio de 1983 se declara la legalidad del acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), sin especificarse el quórum de votación que se obtuvo en dicho acuerdo, por el cual se destituyó al Alcalde, cuyo acuerdo fue objeto de impugnación por el Alcalde ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Granada, que desestimó el recurso interpuesto por el Alcalde cesado, quien interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia apelada y dejó sentado la posibilidad de acuerdo corporativo de destitución de Alcalde sin especificar el quórum de votación preciso para lograr la validez del acuerdo.

Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1984 confirmó la dictada por la Audiencia Territorial de Barcelona, por la que se desestimaba el recurso contencioso-administrativo formulado por el Alcalde de Viladecamps contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 11 de octubre de 1983 de destitución del citado Alcalde, adoptado con el quórum suficiente (14 votos de los 21 miembros del Ayuntamiento).

Fue el ex Alcalde del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria quien acudió, mediante recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional, que dictó auto de 11 de enero de 1984, declarando inadmisibile el recurso de amparo, no encontrando ningún reparo legal que hacer a la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1983.

Con estos datos se puede llegar a la siguiente hipótesis inicial de trabajo: que los acuerdos corporativos por los que se destituye a los Alcaldes en sus cargos son conformes a derecho e inmediatamente ejecutivos. Pero queda por dilucidar el problema relativo a determinar el quórum de votación que se precisa para la adopción de dicho acuerdo. En este sentido merece ser tenido en cuenta un dictamen emitido el día 2 de julio de 1984 por el Director General de Administración Local del Ministerio de Administración Territorial a instancias de la excelentísima señora Gobernadora Civil de Palencia, donde se mantiene el criterio de que para colmar la laguna legal puede y debe acudir a las normas que regulen otros supuestos semejantes entre los que se aprecie una analogía (artículo 4.1 del Código Civil), y que esa norma de referencia muy bien pudiera ser el artículo 34.3 de la Ley de Elecciones Locales que establece que el Presidente de la Diputación puede ser destituido por acuerdo adoptado por las dos terceras partes del número de Diputados.

En el citado dictamen de 2 de julio de 1984 se especifica que los acuerdos corporativos sobre destitución de Alcaldes, válidamente adoptados, tienen carácter de inmediatamente ejecutivos, de conformidad con la regla general establecida en el artículo 361 de la vigente Ley de Régimen Local, y, por tanto, suponen el cese inmediato del Alcalde y la asunción de funciones de la Alcaldía por el primer Teniente de Alcalde, que habrá de convocar pleno corporativo para la elección del nuevo Alcalde. Si hubiera alguna resistencia por parte del Alcalde sustituido, el Alcalde en funciones podrá solicitar el auxilio del Gobernador Civil, quien procederá, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa del acuerdo por los medios admitidos en derecho. Si el Alcalde destituido no estuviera conforme con el acuerdo podrá interponer los recursos procedentes.

Examinado cuanto hasta aquí se ha expuesto en este apartado sobre el cese del Alcalde por moción de censura, este Centro Directivo entiende que, en perfecta hermenéutica de las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, ha de sentar las siguientes:

CONCLUSIONES

PRIMERA.—Existe dentro del ordenamiento jurídico vigente la posibilidad de cese del Alcalde, acordado en moción de censura por los Concejales, cuando los mismos han elegido a aquél.

En principio no se trata de interpretar la Ley (donde no existe precepto expreso), sino de interpretar las sentencias del Tribunal Supremo y el auto del Tribunal Constitucional, que son las que autorizadamente han declarado que son legales los acuerdos municipales de destitución de Alcaldes, basándose en unas consideraciones cuya línea argumental puede resumirse del siguiente modo: 1º La laguna legal producida en materia de destitución de Alcaldes ha de ser suplida. 2º El Alcalde no obtiene su cargo por elección directa de los vecinos

(por lo que se puede alegar un derecho constitucional al cargo), sino por elección de los Concejales. 3º Si el Alcalde pierde la confianza de los Concejales que le votaron, es legal un acuerdo municipal de destitución.

Lo que se desprende de la línea argumental del Tribunal Supremo, confirmada por el Tribunal Constitucional, es que el Alcalde necesita sostener en el tiempo la confianza de los Concejales, con cuyo voto obtuvo el cargo. De ahí que no se vea razón, ni el Tribunal Supremo la aporta, para exigir mayor número de votos en el acuerdo plenario, donde el Alcalde pierde la confianza de sus electores que en el acuerdo donde se ganó la misma y obtuvo el cargo. Por ello, si el Alcalde obtuvo su cargo en una elección para la que le bastó el voto favorable de la mayoría absoluta (artículo 28 de la Ley de Elecciones Locales), basta también un acuerdo adoptado por mayoría absoluta para perder la confianza que ganó en el acto de elección, en aplicación del principio general de que para modificar los actos se requieren los mismos procedimientos y requisitos que para su adopción.

SEGUNDA.—“El quórum” exigido para que la moción de censura pueda prosperar es el de la mayoría absoluta.

Nada se dice de manera expresa en la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1983, ni en el auto del Tribunal Constitucional de 11 de enero de 1984, de cuál sea el quórum necesario para que tenga lugar válidamente el acuerdo de destitución del Alcalde, pero ambas resoluciones afirman la viabilidad del procedimiento. Adentrándonos más en la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo en la materia, llegamos a la sentencia de la Sala Tercera de 27 de marzo de 1984, en cuyo segundo considerando se sienta la doctrina de que: “la aplicación de los principios democráticos que informan la Constitución y la normativa en general, requieren y exigen que el mandato que le fue conferido para acceder a la Presidencia del Ayuntamiento por los Concejales, pueda ser revocado por ellos con justa causa: en definitiva, es la aplicación del principio **contrario actus**, que precisa idénticas formas y modos para modificar o extinguir un mandato que para su concesión y por ello, en atención a que la elección de Alcalde —artículos 140 de la Constitución y 28.3 de la Ley 39/78— se hace por la voluntad de los Concejales o de los vecinos, y siendo el caso que nos ocupa, de los de su elección por los primeros —lo que denomina la sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de febrero de 1983, como elección por sufragio universal de segundo grado—, es evidente que, con el **mismo quórum** y justa causa, pueden los mandantes extinguir el ejercicio de las funciones conferidas al mandatario”.

En el tercer considerando insiste la sentencia citada en la doctrina expuesta e incluso matiza más la cuestión, señalando “que tanto por aplicación del principio de analogía —artículo 34.3 de la Ley 39/78— como por el de **contrario actus**

—artículo 28.3, a) y b), de la Ley 39/78, relativa a la elección—, es visto que el acuerdo está adoptado por el quórum suficiente —14 votos de los 21 miembros del Ayuntamiento—, o sea, 2/3 partes, **si bien en el supuesto presente, por tratarse de Alcaldes, es bastante la mayoría absoluta”**.

En consecuencia, el exigir 2/3 de los Concejales como quórum necesario para la destitución del Alcalde, es, a nuestro juicio, una interpretación incorrecta, pues no puede llegarse a esta conclusión por el simple motivo de que en el Ayuntamiento de Viladecamps el mecanismo de los votos emitidos a favor coincidiera con los 2/3 del total de Concejales, sobre todo cuando la propia sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1984, en el tercero de sus considerandos, despeja cualquier duda que pudiera haber al respecto, al decir literalmente: “**si bien en el supuesto presente, por tratarse de Alcalde, es bastante la mayoría absoluta”**”.

Sólo mediante la producción de una norma positiva de rango suficiente, se vería alterada la situación actual que es la de una laguna legal, suplida por una interpretación del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, en cuyas interpretaciones no se ha exigido quórum reforzado de votación para declarar legales los acuerdos plenarios de destitución de Alcaldes. Por ello, existen poderosas razones para pensar que un acuerdo plenario adoptado por mayoría absoluta por el que se destituye a un Alcalde, es un acuerdo inmediatamente ejecutivo, cuyo efecto será la pérdida del cargo de Alcalde y la celebración de nueva elección. Contra dicho acuerdo podrán establecerse por el Alcalde destituido los recursos pertinentes.

TERCERA.—Tramitación o procedimiento de esta moción de censura.

Queda únicamente por dilucidar el procedimiento por medio del cual consiga llevarse ante una sesión corporativa el asunto de moción de censura y la destitución de un Alcalde. A este respecto han de ser tenidos en cuenta los artículos 294 de la Ley de Régimen Local y 193 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, donde se determina que las Corporaciones Locales celebrarán sesiones extraordinarias a petición de la tercera parte de los miembros que legalmente las constituyen, y que si el Alcalde no atiende a dicha petición, el Gobernador Civil, a denuncia de cualquier Concejál, ordenará al Alcalde que convoque la sesión dentro de los cuatro días siguientes, facultad que seguirá vigente, puesto que el artículo 193.2 del Reglamento citado no ha sido derogado por leyes posteriores ni por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de febrero de 1981. Dicha sesión extraordinaria, solicitada como decimos por un mínimo de un tercio de los Concejales, podrá ser instada con un único punto del orden del día, que se titularía moción de censura contra el Alcalde.

Madrid, a 4 de diciembre de 1984.



